

EL DESARROLLISMO MILITAR PERUANO DE LOS AÑOS SETENTA REVISITADO DESDE URUGUAY. UNA ETAPA PARTICULAR EN EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO DE ESE PAÍS Y LA ATRACCIÓN QUE EL "PERUANISMO" EJERCÍO DURANTE ESOS AÑOS CRÍTICOS EN LA REGIÓN¹

*O DESENVOLVIMENTISMO MILITAR PERUANO DOS ANOS 1970
REVISITADO A PARTIR DO URUGUAI: UMA FASE PARTICULAR NO
DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO NAQUELE PAÍS E A ATRAÇÃO QUE
O "PERUANISMO" EXERCIA DURANTE AQUELES ANOS CRÍTICOS NA
REGIÃO*

*PERUVIAN MILITARY DEVELOPMENTALISM OF THE 1970S REVISITED
FROM URUGUAY: A UNIQUE PHASE IN THE DEVELOPMENT OF
CAPITALISM IN THAT COUNTRY AND THE ATTRACTION THAT
"PERUVIANISM" EXERTED DURING THOSE CRITICAL YEARS IN THE
REGION*

Antonino Zunino² 
Universidad de la República, Uruguay

Resumen: Este texto propone una interpretación del período de la historia económica de Perú comprendido entre 1968 y 1975, el “progresismo militar” liderado por Velasco Alvarado, y la recepción favorable que tuvo este fenómeno en el Uruguay de la época, particularmente entre algunos sectores de izquierda. El análisis se apoya en la literatura académica existente, y se concentra en el carácter de clase del gobierno de Alvarado y la política económica que implementó. Procura insertar el proceso con sus especificidades en la historia económica latinoamericana más general, estableciendo contrastes con el caso uruguayo. Las conclusiones ponen

¹Artículo elaborado a partir del curso Historia Económica del Perú, a cargo del Dr. Carlos Contreras Carranza, para el Doctorado en Ciencias Sociales (opción Historia Económica) de la Universidad de la República (Uruguay). El autor agradece los comentarios realizados por el revisor anónimo de BJLAS, que ayudaron a mejorar sustancialmente la versión original.

² Doctorando en el Programa de Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de la República, Uruguay. Correo: zunino.antonino@gmail.com

énfasis en las diferencias entre las trayectorias y los niveles de desarrollo relativo de ambos países, y destacan la imposibilidad de reproducir la experiencia del desarrollismo militar de Perú en el Uruguay de inicios de los años 1970.

Palabras clave: Historia económica del Perú; Industrialización; Velasco Alvarado; Izquierda en Uruguay; Modernización.

Resumo: Este texto propõe uma interpretação do período da história econômica do Peru compreendido entre 1968 e 1975, conhecido como o "progressismo militar" liderado por Velasco Alvarado, e a recepção favorável desse fenômeno no Uruguai daquela época, particularmente entre certos setores da esquerda. A análise apoia-se na literatura acadêmica existente e concentra-se no caráter de classe do governo de Alvarado e na política econômica que implementou. Busca inserir o processo, com suas especificidades, na história econômica latino-americana mais ampla, estabelecendo contrastes com o caso uruguai. As conclusões enfatizam as diferenças entre as trajetórias e os níveis relativos de desenvolvimento de ambos os países, destacando a impossibilidade de replicar o desenvolvimentismo militar do Peru no Uruguai do início dos anos 1970.

Palavras-chave: História econômica do Peru; Industrialização; Velasco Alvarado; Esquerda no Uruguai; Modernização.

Abstract: This text proposes an interpretation of the period in Peru's economic history between 1968 and 1975, known as the "military progressivism" led by Velasco Alvarado, and the favourable reception this phenomenon had in Uruguay at the time, particularly among certain left-wing sectors. The analysis draws on existing academic literature and focuses on the class character of Alvarado's government and the economic policies it implemented. It seeks to situate the process, with its specificities, within the broader context of Latin American economic history, establishing contrasts with the Uruguayan case. The conclusions emphasise the differences between the trajectories and relative levels of development of both countries, highlighting the impossibility of replicating Peru's military developmentalism in early 1970s Uruguay.

Keywords: Economic history of Peru; Industrialization; Velasco Alvarado; Uruguayan Left; Modernization.

DOI:[10.11606/issn.1676-6288.prolam.2024.227602](https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2024.227602)

Recebido em: 31/07/2023
Aprovado em: 31/12/2024
Publicado em: 01/01/2025

1. Introducción

Este texto propone una reflexión sobre el “progresismo militar” liderado por Juan Velasco Alvarado en Perú entre 1968 y 1975, enmarcada en la historia económica latinoamericana, a partir de la siguiente pregunta: ¿por qué no se reprodujo esta experiencia en el Uruguay de la época? La pertinencia del problema radica en la irradiación de este fenómeno hacia otros países latinoamericanos en el período, entre los cuales estuvo Uruguay, lo que dio lugar al llamado “peruanismo” (ARANDA; RUIZ, 2023; CAVIASCA, 2020; LEANIZ, 2023; TRICÁNICO, 2005), que ejerció una influencia relativamente importante en el devenir político uruguayo durante los años cruciales que preceden al golpe de Estado de 1973.

El período de nuestro interés se enmarca en el turbulento contexto de las luchas sociales y políticas de las décadas de 1960 y 1970 en América Latina, que en Perú se caracterizaron por un alejamiento del liberalismo económico y el conservadurismo político y social adoptados hasta entonces. El desarrollismo militar peruano comienza en 1968 con el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado y se extiende hasta 1975, con su deposición. El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada encabezado por Velasco Alvarado implementó una política nacionalista y antioligárquica, realizó una importante reforma agraria y nacionalizó sectores estratégicos como el petróleo, la minería y las telecomunicaciones. Este proceso coincidió con un momento histórico de grandes transformaciones en la sociedad peruana, que el gobierno procuró acompañar llevando a cabo importantes tareas históricas de modernización y construcción nacional que continuaban pendientes en el país. Entre los principales sectores sociales afectados estuvieron los indígenas, que fueron campesinizados a través de la reforma agraria. El modelo de desarrollo se apoyaba en mayor medida que antes en el mercado interno, que el gobierno buscaba fortalecer, reduciendo las desigualdades sociales y fomentando una mayor participación de los

sectores populares.

La particularidad principal del gobierno de Velasco radica en la implementación de este tipo de política por parte de un gobierno militar, en un momento histórico en que buena parte de América Latina se encaminaba hacia regímenes autoritarios cuya política económica era de orientación contraria, pautada por el regreso al liberalismo económico y la represión de los sectores populares.

La atracción que ejerció esta política de orientación más nacional y popular comparada con lo ofrecido por el panorama latinoamericano de la época, y más en general el fenómeno novedoso de un “militarismo progresista” (ARANDA; RUIZ, 2023, p.254), provocó su irradiación hacia otros países de la región. En Argentina, por ejemplo, inspiró al jefe del ejército nombrado por Juan Domingo Perón en su gobierno de 1973 - el general Jorge Raúl Carcagno, de tendencia abiertamente peruanista y abierto al diálogo con las organizaciones armadas de izquierda (CAVIASCA, 2020). La memoria histórica del velasquismo también guarda resonancia en procesos latinoamericanos contemporáneos como el chavismo venezolano: Hugo Chávez señalaba a Velasco Alvarado como un referente en su pensamiento político, ejemplo de “otro tipo de militar latinoamericano” antagónico al “estereotipo” representado por militares como Augusto Pinochet en Chile (RAMÍREZ, 2024).

Aquí exploramos la recepción de la experiencia peruana en Uruguay, donde el desarrollismo militar encontró cierta aceptación entre algunos sectores de izquierda en los años previos al golpe de Estado que inauguró la dictadura cívico militar (1973-1985). Al contrario de las expectativas que estos sectores pudieron tejer al respecto de la orientación política que tendrían las Fuerzas Armadas en el gobierno, el gobierno militar uruguayo estuvo completamente alineado con los regímenes autoritarios del resto del Cono Sur en la época, pautados por la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y una política económica antipopular (PADRÓS, 2005).

Como argumentamos al final, las diferencias entre las trayectorias históricas y los niveles de desarrollo relativo de los dos países en los años 1970 hacían que fuese imposible la reproducción de un fenómeno semejante al progresismo militar peruano en el Uruguay de la época.

El texto se organiza en seis partes. Tras esta introducción, la segunda parte presenta el marco de análisis utilizado, que refiere a la conformación de coaliciones en el poder en los países periféricos y la estrategia de desarrollo que estas adoptan, constituyéndose en agentes que llevan a cabo la transición entre distintas fases de la historia económica latinoamericana. En la tercera parte se describe el pacto de clases vigente en Perú durante el período elegido y la política económica implementada por la coalición en el poder, caracterizada por la adopción de un nuevo modelo de desarrollo respecto a etapas históricas anteriores. La cuarta parte hace una presentación de la recepción que tuvo el peruanismo dentro de la izquierda uruguaya. En la quinta sección se reflexiona al respecto de las diferencias entre la historia económica de ambos países, que explican la imposibilidad de reproducir la experiencia de Perú en el Uruguay. Finalmente, la sexta sección ofrece unas breves consideraciones finales.

2. Marco teórico

Se propone una interpretación del Estado capitalista que considera que las dos coaliciones de clase básicas que pueden tener lugar en las formaciones sociales de la periferia son de carácter “desarrollista” o “liberal-dependiente” (BRESSER-PEREIRA; IANONI, 2015). En el primer caso, la coalición estaría centrada en los intereses del capital productivo nacional y el proletariado organizado (con mediación del Estado y su “tecnoburocracia”). En el segundo, la burguesía rentista/financiera y el capital extranjero serían principalmente beneficiados, asignando un rol

menos protagónico para el Estado productor y planificador. En ambos casos se trata de tipos ideales estilizados para analizar una realidad compleja y dinámica, en que los equilibrios de fuerzas internos y externos no son fijos.

Tales coaliciones producen "pactos políticos" (con grados variables de explicitación) que se organizan en torno a liderazgos o partidos para el ejercicio efectivo del poder político. Al conformar gobiernos, la praxis de los mismos estará informada por paradigmas no siempre claros de economía política, y limitada por las relaciones de fuerza que los hicieron posible, así como constreñimientos estructurales propios de cada país (entre los que destaca la gravitación del sistema internacional). Esta dinámica cristaliza en un tipo de política pública determinada, que al ser implementada sobre el modelo de desarrollo ya existente en el país, producirá ciertos resultados y en última instancia una variedad específica de capitalismo nacional con grados variables de éxito. Sólo en este sentido acotado puede decirse que un país "persigue una estrategia de desarrollo" determinada.

La caracterización más extendida en la historia económica latinoamericana suele establecer tres grandes modelos de desarrollo, que tipifican la relación Estado-mercado y el tipo de producción realizada en los territorios en cada momento. El modelo primario exportador (hasta la década de 1930), la industrialización por sustitución de importaciones (hasta la década de 1970³), y el modelo neoliberal, que lo sustituye a partir de entonces (BULMER-THOMAS, 1998; PALAZUELOS MANSO, 2000; TALAVERA, 1989). Nuevamente, se trata de hechos estilizados: "modelos de organización económica" (TALAVERA, 1989) inspirados en las experiencias de las economías más importantes de la región - Brasil, México y Argentina -, que permiten ordenar la diversidad latinoamericana en fases históricas distintas para abstraer las particularidades de cada país y comprender el recorrido general de la región en el tiempo.

³ Otros autores, como Bértola y Ocampo (2010) prefieren conceptualizarla como una industrialización dirigida por el Estado.

La historia económica latinoamericana vería entonces la oscilación entre modelos liberal-dependientes ligados a la exportación primaria, un hiato desarrollista y la restauración neoliberal, que lo sucedió a partir de la segunda globalización. A la hora de interpretar la transición entre estas distintas etapas - normalmente operadas por vía autoritaria, y en la mayoría de los casos con participación militar directa - son comunes las lecturas similares a la de Octavio Ianni (1975) sobre los "populismos" clásicos latinoamericanos, que recogen las ideas de Marx y Gramsci sobre bonapartismo y crisis de hegemonía. Figuras como Lázaro Cárdenas (presidente de México entre 1934 y 1940), Getúlio Vargas (presidente de Brasil en 1930-1945 y 1951-1954), y Juan Domingo Perón (presidente de Argentina entre 1946 y 1955) habrían pretendido ejercer un liderazgo autoritario por encima de las clases sociales, articulando intereses contradictorios a través de un discurso nacionalista, para conformar una coalición de clases desarrollista donde los intereses de los sectores beneficiados por el modelo liberal-dependiente quedan subordinados.

A pesar de su valor heurístico, este abordaje por etapas de desarrollo presenta el problema de conducir a una falsa homogeneización, que no contempla el recorrido de aquellos países que no emprendieron estrategias de industrialización exitosas a partir del quiebre en la economía mundial del siglo XX temprano, y en los cuales no se produjo una ruptura de la dominación oligárquica en ese momento (ya sea a través de procesos nacional-populares o de la extensión de la ciudadanía por vías similares a las de los países de Europa occidental).

En este sentido, Uruguay y Perú representan casos antagónicos en el contexto latinoamericano. El primero – junto con otros casos como el de Chile - atravesó un proceso temprano de extensión de la ciudadanía y los derechos políticos, civiles y sociales similar al esquema clásico propuesto por Marshall y Bottomore (1996)⁴ a partir de la experiencia europea. Para

⁴Este proceso consistiría en una extensión progresiva de la ciudadanía a partir de los Estados oligárquicos que sucedieron a las independencias, hasta abarcar a toda la sociedad, en tres etapas: derechos civiles (libertad individual, propiedad y justicia), derechos políticos (sufragio, representación) y derechos sociales (bienestar y

cuando llega el quiebre de los años 1960 y 1970, la sociedad uruguaya ya había completado importantes tareas de modernización política e iniciado cierto desarrollo industrial y de servicios, y había establecido un Estado social relativamente incluyente. Perú, en cambio, se encuentra entre los países de la región – con otros casos como el de Bolivia o la mayoría de América Central – que continuaron mostrando rasgos de dominación oligárquica durante buena parte del siglo XX, y profundizando la exportación primaria. Cuando efectivamente estos países comienzan un proceso industrializador en la segunda mitad del siglo, lo realizan directamente bajo la dependencia del capital transnacional, sin una industria nacional preexistente (CONTRERAS, 2023). La modernización dependiente de la sociedad que este proceso desencadena (activación obrera, ideas modernas, migración a la ciudad, capas medias, etc.) conduce a una fuerte crisis de dominación, que explica la virulencia del conflicto social que sufren estos países en las décadas de setenta y ochenta, muchos de ellos en forma de guerras civiles prolongadas.

Estas diferencias históricas constituyen el centro de nuestro argumento para explicar el signo político opuesto entre las experiencias militares de los dos países durante la misma época: en Perú el gobierno militar se propone ejecutar una política progresista por vía autoritaria, mientras que en Uruguay se propone revertir conquistas sociales ya alcanzadas.

3. Pacto de clases y política implementada durante el gobierno de Velasco Alvarado

Bajo ese lente, el período desarrollista que se abre en Perú en 1962 y se consolida a partir de 1968 puede ser interpretado como una crisis de la hegemonía oligárquica tradicional ligada al modelo primario-exportador

protección social, acceso a la educación).

“mejorado” (CONTRERAS, 2023) que sucedió a la Guerra del Salitre (1879 - 1884) desde fines del s. XIX.

La participación de Perú en la división internacional del trabajo a partir de su incorporación colonial se hizo, como el resto de la región latinoamericana, en tanto proveedor de materias primas. La derrota en la Guerra tuvo el efecto de profundizar esta inserción (CONTRERAS, 2023). Se agregaron a la canasta exportadora nuevos productos primarios (cobre, lana, caucho, petróleo, café), cuya explotación, más compleja que la del guano tradicional, quedaba en manos de la inversión privada (CONTRERAS, 2023, p. 273). La perpetuación del modelo primario-exportador no condujo a la diversificación y complejización de la estructura productiva peruana, como ocurrió en los países que emprendieron procesos de industrialización. Por el contrario, en Perú se exacerbó, durante el siglo XX, el patrón de desarrollo dual o heterogéneo característico del capitalismo latinoamericano (PINTO, 1970)⁵.

Esta economía desintegrada no acompañó las importantes transformaciones que atravesó la sociedad en ese tiempo. Ocurrieron en simultáneo una explosión demográfica y grandes procesos migratorios internos, desde la sierra hacia la costa y la selva. Entre 1930 y 1980 la población pasó a ser más del triple, de 5,4 a 17,1 millones; la proporción de habitantes rurales y urbanos se invirtió, pasando de 64% en el campo y 36% en las ciudades a 31% y 69% respectivamente (CONTRERAS, 2023). La modernización de la sociedad trajo aparejada la emergencia de numerosas demandas que permanecieron insatisfechas, como la aspiración del acceso a la tierra, al empleo asalariado y la integración social. Fueron surgiendo partidos “mesocráticos”, representantes de los intereses de nuevas camadas sociales y portadores de ideologías antioligárquicas, que demandaban otro tipo de política económica más nacionalista e

⁵Este patrón estaría compuesto por una dinámica viciosa entre dos sectores fragmentados que se refuerzan mutuamente, pujante uno (ligado a la economía mundial y la modernidad, con altos niveles de productividad y tecnología), y estancado el otro (caracterizado por la informalidad y la baja productividad del trabajo), en el que se desempeña gran parte de la población.

integradora⁶ (CONTRERAS, 2023): “La explosión demográfica provocó fuertes tensiones sociales, que hicieron de la reforma agraria y el crecimiento del empleo público hechos inevitables” (2023, p. 426).

De ese desfase, nace la crisis, cuando al cabo de décadas eclosionan estas contradicciones y, en los años 1960, los nuevos actores políticos desplazan a los representantes directos de la oligarquía y llegan al gobierno por primera vez, aunque sin producir las reformas profundas que reclamaban numerosos sectores de la población por vía de la democracia representativa (AGUIRRE; DRINOT, 2018, p. 12).

3.1 Crisis de hegemonía y pacto de clases

¿Existió realmente una nueva coalición de clases desarrollista que desplazó a la oligarquía de su posición hegemónica y reemplazó el pacto político liberal-dependiente por uno distinto? No de forma duradera y mucho menos estable, sino con numerosos vaivenes que nunca llegaron a resolver la crisis de hegemonía. Los sectores oligárquicos tradicionales ya eran incapaces de seguir detentando el poder prácticamente solos, pero tampoco aparecía un actor nuevo capaz de aglutinar los distintos intereses emergentes y constituirse como representante del interés general.

Este vacío de poder es el que vienen a llenar las Fuerzas Armadas. A partir de 1968 y hasta 1975 radicalizaron el cambio de rumbo que alejaba al país del modelo liberal exportador antes vigente para perseguir uno desarrollista, ejerciendo un gobierno militar en el nombre del pueblo. Si la totalidad del período 1962-1989 es la versión peruana del nacional-desarrollismo latinoamericano, desfasado de los casos clásicos que tuvieron lugar a partir de los años 1930 en los países más avanzados de la región, Velasco es la versión peruana (y, como se argumenta después,

⁶ Los ejemplos paradigmáticos son el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) y el Partido Socialista Peruano (luego devenido Partido Comunista).

tardía) del líder bonapartista popular latinoamericano.

Aranda y Ruiz (2023, p. 256) distinguen los regímenes militares existentes en la región en los años 1970. Por una parte estarían las expresiones del Estado Burocrático-Autoritario descrito por O'Donnell (1996), gobiernos militares de derecha con una política económica liberal, anticomunistas y alineados a EE.UU., e informados por la Doctrina de Seguridad Nacional (como los de Argentina desde 1977, Chile y Uruguay desde 1973)⁷. Por otra parte, estarían los “militarismos progresistas” - militares autoidentificados como nacionalistas y designados también como “militarismos reformistas”, “populismos militares” y “bonapartismos progresistas” -, como el de Perú o los de Panamá (1968-1981) y Ecuador (1972-1976). Estos serían detentores de un proyecto “comunitarista de participación popular”, y habrían implementado una política más redistributiva y la nacionalización de importantes sectores económicos como los de hidrocarburos. También anticomunistas, estarían no obstante menos alineados geopolíticamente a EE.UU. por su orientación antiimperialista. Aranda y Ruiz (2023, p.256) asocian estos últimos, a mi entender acertadamente, con fenómenos como el chavismo venezolano en el mundo actual posterior a la Guerra Fría (ARANDA; RUIZ, 2023, p. 256).

La orientación política del velasquismo es difícil de caracterizar debido a su carácter “peculiar” (AGUIRRE; DRINOT, 2018). Buena parte de la literatura académica ha debatido al respecto de qué signo político asignar al “experimento peruano” (2018, p. 15), tanto en el eje tradicional izquierda / derecha, como por su carácter corporativista, o su orientación nacionalista pero carente de participación. “El gobierno militar fue en ocasiones acusado de querer seguir un modelo “comunista”. Por otro lado, el gobierno de Velasco fue también acusado de fascista por la ultraizquierda, en particular por facciones maoístas con influencia en organizaciones campesinas, laborales y estudiantiles” (2018, p. 13).

⁷Estos autores también colocan a Brasil en el primer grupo, si bien en este caso yo identifico - quizá por las dimensiones de su economía industrial - una tendencia más marcada hacia el autoritarismo desarrollista.

¿Cuál era entonces la base de apoyo del “militarismo progresista” al desplazar del poder político - al menos en forma provisoria - a los sectores ligados a la exportación primaria? Al configurarse una nueva correlación de fuerzas entre las clases sociales con mayor protagonismo del Estado como organizador de la vida económica del país, la burocracia pública, un actor social relativamente nuevo, pasa a tener mayores cuotas de poder. Y lo ejerce en alianza con un conjunto muy diverso de otros actores: “[hubo] grupos políticos, sindicales, intelectuales y empresariales que apoyaron el proyecto militar y colaboraron con él. El prosoviético Partido Comunista Peruano, el Partido Demócrata Cristiano, ex miembros del feneado Movimiento Social Progresista, ex guerrilleros, sectores progresistas de la Iglesia católica, dirigentes sindicales y ex militantes del APRA y otros partidos políticos aplaudieron la agenda de los militares y participaron en su implementación o la apoyaron desde afuera” (AGUIRRE; DRINOT, 2018, p. 13).

Esa heterogeneidad implicó que se tratase de un arreglo frágil; estos autores describen numerosas fracturas y tensiones entre las distintas facciones, que Velasco equilibra desde el gobierno con la ambigüedad de clases característica del bonapartismo⁸. En cuanto a los sectores oligárquicos tradicionales, si bien ocupan una posición subordinada dentro del bloque en el poder, no desaparecen sino que trasladan sus actividades hacia los nuevos sectores económicos de acumulación más dinámica, la banca y el comercio (CONTRERAS, 2023, p. 406).

3.2 La política económica implementada por el desarrollismo militar peruano y sus resultados

En cuanto a la política efectivamente implementada por el gobierno,

⁸Contreras (2023, p. 415) señala, apoyado en la literatura, cómo la inconsistencia ideológica del régimen militar (“ni izquierda, ni derecha, ni centro”) representó una de sus principales debilidades, impidiéndole ganar el apoyo masivo de los trabajadores al negarse a virar decididamente hacia la izquierda, y el de los capitalistas domésticos y extranjeros al atacar a los intereses comerciales y a la derecha.

a través de reformas que afectaron prácticamente todas las esferas de la sociedad peruana, mi conclusión es que tuvo más de nacionalista que de popular, si bien existieron ambos elementos.

La más emblemática acción de nacionalismo económico fue la nacionalización del petróleo a sólo seis días de comenzar el mandato, recurso hasta entonces controlado por empresas estadounidenses cuyas renegociaciones con el gobierno anterior de Belaunde habían generado descontento entre los peruanos (AGUIRRE; DRINOT, 2018, p. 13). A partir de entonces el Estado pasó a jugar un rol central en la economía, y el eje dinámico del crecimiento pasó a ser el gasto público; se nacionalizaron numerosas empresas extranjeras, y se comenzó la promoción de la cultura y las poblaciones indígenas acompañada por “una fuerte retórica nacionalista” (AGUIRRE; DRINOT, 2018, p. 13). También hubo un importante aumento del gasto militar para comprar armamento y modernizar al ejército, hacia el que se fue gran parte de las divisas generadas por las exportaciones, lo que generó un importante aumento de la deuda externa; después de Brasil, Perú fue el país latinoamericano que más gastó en armamento durante el período (CONTRERAS, 2023, p. 412).

Dentro del eje popular destaca la reforma agraria, caracterizada como “ambiciosa” y “radical” e iniciada a menos de un año de tomar el gobierno. Se trata de la medida que tuvo los efectos más hondos y duraderos sobre la estructura de la sociedad peruana, algo sobre lo que hay amplio consenso en la literatura (AGUIRRE; DRINOT, 2018; CONTRERAS, 2023; ROJAS ROJAS, 2021). La reforma expropiaba las haciendas de gran extensión (a partir de 50 hectáreas en la costa y 150 hectáreas en la sierra) y las entregaba a sus trabajadores junto con el capital contenido en ellas (animales, maquinaria, etc.). Los bienes eran transferidos en usufructo a empresas cooperativas para que no pudiesen venderse individualmente a la vez que se conservaban las economías de escala de los latifundios, y en la práctica las antiguas haciendas dedicadas a la exportación pasaron a estar

bajo control del gobierno (CONTRERAS, 2023, p. 403).

Destacan también avances en los derechos laborales, y subsidios a los alimentos para apoyar a los sectores populares. Se procuró, también, que estos últimos se constituyesen como base de apoyo del proceso:

Para promover el apoyo popular al régimen se creó, en 1971, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos) [a cargo de] movilizar a los sectores populares detrás de los cambios que se estaban implementando. Las tácticas verticales y de cooptación del Sinamos generaron conflictos con organizaciones populares y de base, así como con el APRA y varios grupos de izquierda. También produjo tensiones dentro del aparato estatal. El apelativo con el que se conoció al grupo de intelectuales que controlaba el Sinamos —«la aplanadora»— revela las percepciones existentes de su rol en el proceso político. (AGUIRRE; DRINOT, 2018, p. 14)

Los resultados cosechados por el desarrollismo peruano en su totalidad no fueron espectaculares; dentro del período, el de los militares no fue el de peor desempeño, pero tampoco produjo una mejoría económica inequívoca. Contreras (2023, p. 411) señala que “en cuanto a las exportaciones per cápita el país era más pobre en los años ochenta que en los sesenta”. También apunta a una grave crisis fiscal decorrente de la inversión pública en actividades no redituables, como la compra de armamentos y el subsidio a los alimentos, así como un fuerte incremento de la deuda externa, que se quintuplicó entre 1968 y 1980 (2023, p. 413).

El autor señala, pese a todo, algunos logros en la instauración de industrias básicas que sustituían la importación de bienes de consumo, especialmente los de consumo duradero (electrodomésticos, muebles y automóviles), que pasaron a ser ensamblados en Perú. Notablemente, el desarrollo de la siderúrgica, el PVC y la construcción naval permitieron la aparición de actividades conexas y la transformación de la exportación algodonera “en una industria textil capaz de dar el salto a las ventas al exterior en el período siguiente”, si bien todo esto fue logrado al costo de una “pavorosa” crisis hiperinflacionaria que marcó el fin de la era desarrollista (2023, p. 427–428).

En definitiva, el mayor logro del gobierno fue, como señala toda la literatura revisada, el fin de la servidumbre agraria y la ruptura de las formas tradicionales de dominación que la acompañaban, logrando el propósito de Velasco Alvarado de “quebrarle el espinazo a la oligarquía” (2023, p. 405). Contreras considera que se trataba de una “tarea pendiente” en la historia económica y social peruana desde la época de la Independencia (2023, p. 427).

Esto se hizo fundamentalmente a través de la reforma agraria, sobre cuyos resultados podemos agregar tres comentarios. Primeramente que, a diferencia de otros intentos similares emprendidos en América Latina, en este caso pudo ser llevada a cabo sin verse interrumpida:

La propiedad agropecuaria retirada a lo que presumiblemente serían 16.000 familias [...] fue repartida entre casi 400.000 familias. Habría que retroceder probablemente hasta la independencia, y quizás incluso antes, para dar con una reasignación de la tierra de esta magnitud en el Perú. [...] Cuando se cumplió una década de la [...] reforma agraria [...] habían sido expropiados 15.826 fundos al amparo de dicha norma, con un total de 9,1 millones de hectáreas, que significaban más o menos la tercera parte de todas las tierras agrícolas o de pastoreo del país. Pero lo importante es que se trataba del tercio más valioso y productivo. (CONTRERAS, 2023, p. 403–405)

En segundo lugar, matizando un poco esta valoración exitosa, la expropiación de tierras se hacía a cambio de bonos agrarios que se pagarían con un pequeño interés, cuyo valor fue, en la práctica, destruido por la inflación de los años siguientes. Un aspecto importante de la reforma en tanto pieza central de un programa desarrollista era que, como medida de fomento a la actividad industrial, el gobierno ofrecía el pago inmediato de una parte importante de los bonos a los terratenientes que se transformasen en empresarios industriales. “Amargados con la expropiación (se los sacó de las haciendas a punta de fusil, la maquinaria y los animales fueron tasados a precios ínfimos, igual que las tierras, y algunos fueron juzgados por los tribunales agrarios montados para la ocasión, acusados de haber sido malos patronos), pocos de los antiguos terratenientes aceptaron tomar esta alternativa” (2023, p. 406).

Por último, con respecto a los beneficiarios de la reforma y al proyecto político de fondo del velasquismo, es importante precisar que la idea original era que los primeros pagasen las tierras al Estado en el largo plazo, pero esta “deuda agraria” acabó siendo eliminada por la inflación y condonada por la Asamblea Constituyente en 1979. Muchos de los receptores de tierras promovieron la parcelación de las cooperativas y el derecho a su venta individual en las décadas siguientes, ya que “no participaban de la idea de gestión colectiva que el gobierno militar quiso imponer” (2023, p. 405).

Hay dos citas interesantes en la literatura revisada que aportan perspectiva histórica a las políticas descritas. La primera permite captar la especificidad de este capítulo de la historia peruana, imposible de subsumir en la generalidad latinoamericana y todavía interesante para pensar la economía política del desarrollo periférico. Como dicen Aguirre y Drinot (2018, p. 34), se trató de

una iniciativa extraordinaria y única: en un contexto dominado por regímenes dictatoriales de derecha latinoamericanos y la lucha contra el comunismo, las Fuerzas Armadas peruanas se embarcaron en un proceso destinado a conseguir la liberación nacional y la promoción de justicia, que se basó en una evaluación incómoda e inusualmente sincera de las profundas causas históricas y estructurales de la desigualdad social y el subdesarrollo en el país, y promovió la movilización popular como el medio para lograr la emancipación social y económica.

La segunda, en cambio, describe la reversión de los logros del “progresismo militar” durante la etapa posterior con un tono más amargo, vigente en el Perú hasta el día de hoy:

La herencia velasquista se desvaneció con las reformas neoliberales de Alberto Fujimori, reformas que acabaron con el papel central del Estado en la economía, debilitaron la sindicalización, incrementaron la informalidad y cooptaron a las organizaciones vinculadas a los programas de ayuda social. Como ocurrió con Velasco, las reformas de Fujimori reestructuraron a la sociedad peruana, cancelaron un ciclo histórico y abrieron uno nuevo, basado en la desregulación de los mercados. (ROJAS ROJAS, 2021, p. 277)

4. El peruanismo en Uruguay

En el caso uruguayo, el veredicto es que no existió cosa semejante a un verdadero peruanismo, sino acaso como maniobra discursiva de las Fuerzas Armadas en su aproximación al poder político durante una época de deslegitimación de la democracia representativa, y en la imaginación de ciertos sectores políticos que se apresuraron a darles crédito.

Los años previos al golpe de Estado que suspendería la continuidad republicana excepcionalmente larga del país en la región, dando inicio a la dictadura cívico-militar (1973-1985)⁹, son el escenario en que el peruanismo adquirió particular gravitación en Uruguay. El contexto uruguayo de los años 1960 y 1970 es de una crisis socioeconómica profunda, violencia política de parte del Estado y la guerrilla, además del deterioro de las instituciones democráticas. La economía uruguaya había disfrutado históricamente de un crecimiento constante que permitió a su sociedad alcanzar elevados niveles de bienestar social y consolidar una democracia representativa con sistema de partidos estable. A partir de los años 1950, la expansión económica y su concomitante desarrollo institucional se detuvieron, desembocando en una crisis estructural (PADRÓS, 2005; TRICÁNICO, 2005). El deterioro sostenido de las condiciones socioeconómicas y la efervescencia regional de la época vieron surgir grupos políticos armados¹⁰ y los primeros episodios de terrorismo de Estado, así como una creciente injerencia de las Fuerzas Armadas en la vida política.

En 1971 se funda el Frente Amplio, una coalición electoral que reunía a la mayor parte de la izquierda con tendencias muy heterogéneas en su seno, como el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista y el Partido

⁹Padrós (2005) hace un estudio de la dictadura uruguaya desde la perspectiva del Terrorismo de Estado y la aplicación de un programa económico autoritario, que apuntó al disciplinamiento de la fuerza de trabajo demandado por las transformaciones del capitalismo mundial. Su estudio abarca también los años previos al golpe de 1973.

¹⁰El más importante siendo el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, cuyo nombre precisamente está inspirado en la experiencia altoperuana colonial y el apodo despectivo que las autoridades españolas de la colonia utilizaban en el Río de la Plata contra los independentistas.

Comunista, entre otros grupos. Para 1972, el movimiento guerrillero se encontraba desarticulado y sus principales dirigentes se encontraban presos. La prórroga de la restricción de las libertades y garantías individuales¹¹, que tenían como objetivo declarado otorgar mayor poder a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla, "no sólo no tenía justificación, sino que implicaba que las Fuerzas Armadas se habían superpuesto a los organismos del poder civil" (TRICÁNICO, 2005, p. 16). Entre febrero y junio de 1973 ocurrió un "golpe en cámara lenta" en que el poder civil se vio crecientemente desplazado por parte del militar (TRICÁNICO, 2005, p. 21). En febrero el Ejército y la Fuerza Aérea se opusieron a la destitución del Ministro de Defensa por parte del Presidente, la Armada aceptó al nuevo ministro, y el Presidente convocó a una manifestación ciudadana en rechazo a la insubordinación, que no tuvo una convocatoria importante: "se juntaron doscientas personas, incluyendo a periodistas y curiosos" (TRICÁNICO, 2005, p. 16). Esta primera crisis se resolvió a través del Acuerdo de Boiso Lanza, en que el Presidente acató las exigencias de los mandos militares para permanecer en el cargo. El jefe de la Armada sería sustituido y esta rama se alinearía a las otras dos. En junio de 1973 se consumaría el inicio de la dictadura, con la disolución del parlamento por parte del Presidente y el establecimiento de un gobierno militar.

Días antes de alcanzar el Acuerdo de Boiso Lanza, durante la primera etapa del golpe de Estado - el llamado "febrero amargo" (TRICÁNICO, 2005) - las Fuerzas Armadas emitieron un conjunto de señales a la ciudadanía al respecto de la crisis en que se encontraba el país y sus posibles soluciones, la visión que tenían para el futuro del país, y cuáles deberían ser sus propias funciones dentro de este proyecto. Estos mensajes se sintetizan principalmente en los comunicados N° 4 y N°7¹² de los mandos conjuntos de 9 y 10 de febrero de 1973. En ellos se anunciaaba un plan político que

¹¹Las Medidas Prontas de Seguridad, implementadas en democracia desde 1967.

¹²El texto completo de los comunicados puede consultarse en <https://www.uvpress.net/auc.aspx?74973%> (UY Press, 2017); también se incluyen en Tricánico (2005).

incluía “eliminar la deuda externa, erradicar la desocupación, combatir los ilícitos económicos y la corrupción, reorganizar y racionalizar la administración pública, redistribuir la tierra, [y] garantizar el acceso a la propiedad a quien la trabaje” (LEANIZ, 2023, p. 4). Se proponía también atender al desarrollo de las comunicaciones y el transporte, la modernización y tecnificación de la enseñanza de acuerdo a las necesidades de la seguridad nacional, combatir la inflación y “defender el poder adquisitivo del ciudadano, además de garantizar a todos la mejor asistencia médica posible” (2023, p. 4).

Tricánico (p. 11) señala el peruanismo “explícito” de estos comunicados, que fue reportado por las agencias de prensa nacionales e internacionales¹³. Las disposiciones “l” y “m” del ítem 5° del Comunicado N°4 son las de carácter más popular. En ellas, las Fuerzas Armadas (todavía sin participación de la Armada) se plantean “alcanzar o impulsar la obtención de los siguientes objetivos”:

l) Realizar los mayores esfuerzos, a fin de canalizar la mayor cantidad posible del ingreso nacional fortaleciendo la capacidad productiva de toda la población y aumentando simultáneamente el ahorro. En ese sentido, conscientes de que la distribución del ingreso es de las cuestiones que más estrechamente se encuentran asociadas a la distribución de poder, asegurar paralelamente al aumento del ingreso nacional que se obtenga en cada período, un aumento en la participación de los grupos menos favorecidos, tanto en términos absolutos como relativos.

m) Establecer disposiciones que permitan combatir tan eficazmente como sea posible los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de los medios de producción. Asegurar el interés obrero por impulsar y mejorar la producción, arbitrando soluciones que estimulen la participación de los mismos en la dirección de las empresas, tanto en el sector público como en el privado.

La distancia entre esta orientación popular anunciada y las acciones efectivamente emprendidas por la dictadura posterior conducen a discutir si la emisión de los comunicados se trató de una “operación psicopolítica de inteligencia para dividir y/o confundir a la izquierda política y sindical” o

¹³Por ejemplo, el Diario *Le Monde* de París (13/2/1973): “Los jefes del ejército han confeccionado un plan político al que no le falta cierta analogía con el de los militares peruanos” (TRICÁNICO, 2005, p. 167).

bien de la “manifestación de las contradicciones internas de los militares” (TRICÁNICO, 2005, p. 11). Existían tensiones y diferencias profundas en el seno de las Fuerzas Armadas, entre sectores antigolpistas, una línea “dura”, de derecha, y una línea peruanista, más popular (ARANDA; RUIZ, 2023; LEANIZ, 2023; TRICÁNICO, 2005). “El predominio de los militares denominados ‘duros’ dentro del Ejército reafirmó aún más las ideas golpistas. Los llamados ‘febreristas’, quienes habían creído firmemente en las ideas progresistas y que eran sindicados como reformistas, fueron desplazados, destituidos o presos” (TRICÁNICO, 2005, p. 21).

Los comunicados tuvieron recepciones encontradas en la sociedad y el sistema político (ARANDA; RUIZ, 2023; LEANIZ, 2023; TRICÁNICO, 2005). La ausencia de un rechazo unánime a la injerencia militar es sintomática del descreimiento generalizado de los uruguayos de la época en sus instituciones; la débil convocatoria del llamado a manifestarse en rechazo de la insubordinación fue interpretada por los militares, en un comunicado posterior al Acuerdo de Boiso Lanza, como un “apoyo tácito” brindado por la población¹⁴. Tanto en la derecha como en la izquierda hubo expresiones de simpatía y de rechazo a los comunicados. En este trabajo me concentro solamente en la izquierda por haber sido la gran derrotada en los sucesos históricos posteriores, con sus organizaciones políticas y sindicales proscritas y perseguidas por el Terrorismo de Estado, siendo que su proyecto económico estaba bastante alineado con lo que se proclamó en los comunicados N°4 y N°7.

Importantes sectores de la izquierda como el Partido Comunista y buena parte del Partido Socialista “quisieron leer los comunicados como la irrupción pública del ala peruanista” (ARANDA; RUIZ, 2023, p. 266). Otra corriente (según estos autores “minoritaria”) se opuso a la intervención militar, entendiendo que la misma estaría más inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional que en el peruanismo. Tricánico (2005) ofrece un

¹⁴Comunicado N°13 de 13 feb. 1973. Disponible en: <https://www.uvpress.net/Secciones/Documentos-sobre-el-9-de-febrero-de-1973-uc74973>. Consultado en: 6 dic. 2024.

panorama de la división de la izquierda, que se reflejó en las opiniones encontradas dentro de la Mesa Política que dirigía el Frente Amplio. Enrique Erro¹⁵, uno de sus dirigentes (que sería en los años siguientes exiliado por la dictadura, primero en Argentina y luego en Francia hasta su fallecimiento) se manifestó en contra (2005, p.18). El dirigente socialista Vivián Trías (1922-1980) apoyó los comunicados, lo que “generó una polémica bastante dura dentro del Partido Socialista”, dado que no todo su Comité Central acompañaba esta postura (2005, p.19). El Partido Demócrata Cristiano se vio dividido entre el dirigente Juan Pablo Terra, que defendió los comunicados, y la juventud del partido, que “sostenía que el apoyo a los mismos resultaba peligrosamente engañoso” (2005, p.19).

Las dos actitudes antagónicas al interior de la izquierda se exemplifican bien al contrastar los editoriales de *El Popular* (órgano de prensa del Partido Comunista) de 11/2/1973, y de la revista *Marcha* de 16/2/1973¹⁶. El editorial de *El Popular* valoraba como “positivo” el mensaje transmitido en los comunicados, insistía en que el dilema importante no era “entre poder civil y poder militar” sino “entre oligarquía y pueblo”, y consideraba que se abría una nueva etapa en la que los militares patriotas desempeñarían “un rol de primer orden” en la superación de la crisis. Encontraba “razonable” que las Fuerzas Armadas que “no se consideran una simple fuerza de represión o vigilancia” quisieran dar su opinión sobre la problemática del país; y sentenciaba que “quienes tienen menos derecho que nadie a discutir esa actitud son los que les han dado determinadas funciones en los últimos tiempos”.

El argumento de fondo era que, puesto que las garantías constitucionales y la democracia representativa ya habían sido largamente subvertidas en la práctica - amén de representar un resabio obsoleto del orden burgués - la defensa de la institucionalidad republicana era deshonesta y carecía de sentido. Se culpaba del incipiente terrorismo de

¹⁵Enrique Erro (1912-1984), político de origen nacionalista que a partir de 1962 se incorporó al Frente Amplio.

¹⁶Disponibles en: <https://www.uypress.net/Secciones/Documentos-sobre-el-9-de-febrero-de-1973-uc74973>. Consultado en: 3 dic. 2024. También se incluyen en Tricánico (2005).

Estado, no a las Fuerzas Armadas sino a la oligarquía que las había puesto a ejercer esa función. Hasta aquí, el argumento es atendible, al menos desde las posturas más críticas con el orden liberal. No obstante, se pretendía adivinar en estos comunicados y las acciones de los militares asociados a ellos una toma de conciencia al respecto de esta perversión de sus funciones que, como se argumenta a continuación, era infundada y constituyó un error histórico grave.

Entre las “salvedades” de las que se distanciaba, aparece una insuficiente definición antiimperialista, y la omisión en los documentos de la “preservación de los derechos sindicales, como, en general, el restablecimiento de las libertades democráticas – comprendiendo la libertad de presos sin proceso”. Pero principalmente se criticaba la profesión ideológica anticomunista del comunicado N°4, que establecía entre sus objetivos “evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas”. El Popular calificaba esto de “evidente error”, puesto que “los marxistas-leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas”. No obstante, se concluía que “este error, sin minimizarlo, no invalida el concepto general que tenemos del documento”.

El editorial de Marcha, escrito por Carlos Quijano¹⁷, hacía la lectura opuesta, sosteniendo que “es preferible tener una constitución, aun mala, aun violada, a no tener ninguna”. Criticaba a quienes, “movidos en el mejor de los casos por cegadores espejismos”, entendían que el poder militar podía “hacer o impulsar la ‘revolución’ que el país necesita”, consolándose con la idea de que el fin justificaría los medios. Y sostenía que al poder militar “no le corresponde ejercer el poder político”, siendo esta “una conmixinión peligrosa”.

En esta instancia, como en otras, Quijano se muestra preclaro.

¹⁷Carlos Quijano (1900-1984) fue un intelectual uruguayo de izquierda, de pensamiento antiimperialista y latinoamericano, fundador y director de la revista Marcha, en la que divulgaba sus ideas.

Percibiendo que “la sombra” de la dictadura estaba ya “al alcance de la mano”, aludía a la polarización dentro de la izquierda diciendo: “tiempos hay para todo. Tiempo para quedar solo, también. No sería la primera vez”. Su lectura contemporánea de los hechos condice con el análisis general propuesto aquí al respecto de las diferencias estructurales que marcan distintas etapas históricas de desarrollo dentro de la región latinoamericana, e impiden la reproducción de fenómenos como el peruanismo en el Uruguay. “Se suele hablar de experiencias extranjeras para cohonestar ciertos alborozos y ciertos deseos: la de los militares revolucionarios de Perú, la de los no menos revolucionarios de Ecuador; o la de los también revolucionarios de Panamá. [...] ¿Por qué volar tan lejos, a tierras que son distintas de las nuestras, a países con estructuras económicas y sociales y superestructuras políticas que no se asemejan a las de Uruguay? ¿Por qué, en cambio, olvidar a Argentina que está ahí cerquita, allende el disputado río?”.

Al respecto de este último país, cuya realidad sería más cercana a la uruguaya y sí permitiría extrapolar conclusiones, Quijano evocaba los debates que había tenido con militantes argentinos unos años antes, que habían depositado su confianza en los militares para realizar la “revolución nacional” que Argentina necesitaba, y que el gobierno militar llevaría a cabo por no tener “otra salida”¹⁸. “Nos repetían hasta el cansancio, razones y expresiones que ahora [en el Uruguay de 1973] extrañamente hemos vuelto a oír. A la basura con los formalismos democráticos, nos decían en síntesis; todo eso ha muerto; es el legado del podrido liberalismo del siglo XIX. [...] No les fue muy bien a nuestros amigos de siempre, que volvieron a luchar por lo que nunca debían haber abandonado”, sentenciaba, en referencia a la democracia.

El editorial abogaba por la convocatoria a nuevas elecciones como salida a la crisis. No obstante, advertía lo improbable de este desenlace en un escenario tan degradado: “no nos hacemos muchas ilusiones al

¹⁸En referencia al gobierno de Juan Carlos Onganía, que gobernó Argentina entre 1966 y 1973.

respecto [...] El horizonte es [...] oscuro".

Leaniz (2023, p. 6) resalta que "los comunicados marcan objetivos, pero no dicen cómo lograrlos, cuando ese era el gran problema a resolver. Todo el mundo estaba de acuerdo con esas metas, lo que justamente había que decidir era el proceso para lograr tales fines y eso no estaba establecido. Por eso para algunos, las propuestas carecían de seriedad".

En los hechos, cuando la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) implementa efectivamente su programa económico, el mismo resulta estar en las antípodas del velasquismo. Apuntó a la compresión del consumo de los sectores populares para contener la inflación, buscando normalizar nuevamente la vida económica (O'DONNELL, 1996). A su vez, suspendió el movimiento sindical mientras sentaba las bases para el ingreso del país a la segunda globalización y preparaba el terreno para la reforma neoliberal (PADRÓS, 2005). Esta última significó una regresión al modelo liberal-dependiente basado en la agroexportación, y el abandono de todo proyecto industrializador para el país.

En la política económica llevada a cabo por la dictadura, las medidas de inspiración peruanista de los comunicados 4 y 7 no se vieron aplicadas. Por el contrario, a partir de 1974 las políticas económicas asumidas fueron de neto corte neoliberal y alineadas con los organismos financieros multilaterales como el BID y FMI. Esto abre una discusión sobre si tales comunicados fueron simplemente enunciados para una rápida aceptación de la propuesta militar o si el grupo "peruanista" de las Fuerzas Armadas fue perdiendo terreno frente a otras corrientes dentro de las mismas. (LEANIZ, 2023, p. 6)

Para Tricánico (2005, p. 165) "la prensa extranjera desde hacía tiempo venía denunciando el predominio de los militares en la vida política uruguaya. Todo hace parecer que desde el exterior fue vista con mayor claridad la situación vivida por aquellos tiempos". Algunos protagonistas de la época se muestran autocríticos al respecto; por ejemplo, el ex dirigente comunista Esteban Valenti declaraba en 2003: "hoy, con la historia vista no tengo la menor duda de que cometimos un error [...] en una visión 'peruanista', de un posible atajo nacionalista hacia la liberación, que influyó

de manera muy fuerte en la izquierda del continente" (TRICÁNICO, 2005, p. 19).

Aranda y Ruiz (2023) asignan un peso importante al "mito del guerrero" para explicar el atractivo que habría tenido para la izquierda la imagen de unos militares que reemplazan a los representantes de la oligarquía e implementan una política que rompe con la anterior. En su interpretación, esta fascinación constituye un error histórico de esa parte de la izquierda, que la lleva a bajar la guardia frente al inminente golpe de Estado.

El carácter militar del mito revolucionario de la Nueva Izquierda — en un momento crítico para su sobrevivencia y de devaluación democrática desde su interpretación — favoreció las tendencias al interior de las izquierdas ilusionadas con un gobierno militar "a la peruana", de un reformismo profundo para acometer cambios en el sistema político económico, lo que les llevó a ignorar la amenaza castrense que se concretaría en las dictaduras de la Seguridad Nacional. (2023, p. 254)

5. La distancia entre los dos escenarios

¿Cómo se explican las diferencias notables entre el "progresismo militar" de algunos países andinos y centroamericanos y las dictaduras neoliberales del Cono Sur, que transcurren durante la misma época? ¿Por qué no hubo un verdadero peruanismo en el Uruguay y el Cono Sur? Si se trata de proponer una respuesta a estas preguntas emparentadas, entiendo que la esquematización por etapas de la historia económica latinoamericana reseñada antes ofrece el punto de partida más fecundo.

Los países que atravesaron el proceso particular del progresismo militar en los años 1960 y 1970 se encontraban en una fase anterior del desarrollo capitalista latinoamericano, que hacía estructuralmente posible - y, para las visiones más mecanicistas, quizá necesaria - su aparición. En todos los casos, se trataba de un desarrollo relativamente tardío, con formas de dominación oligárquica, cuyo origen remontaba hasta la Colonia, todavía vigentes al comenzar el último tercio del siglo XX.

En la historia económica de Perú se dio un proceso en que las nuevas modalidades productivas y sus relaciones sociales correspondientes se fueron superponiendo a las que ya existían en el territorio, más que sustituirlas. Es el caso de los españoles durante el Virreinato, establecido sobre un territorio densamente poblado y en el que ya había desarrollo urbano, donde la dominación colonial se apoyó en el sistema incaico precedente. También es el caso de la república oligárquica posterior, aún a través de los ciclos del guano y el salitre del siglo XIX, que particularmente en el medio rural conservaba importantes trabas para la consolidación de una economía moderna con trabajo asalariado¹⁹. Estas estructuras dispares de largo arraigo conforman “sociedades abigarradas” (ZAVALETA MERCADO, 1986), en las que coexisten diversos tiempos históricos y relaciones de producción.

Este recorrido se distingue hondamente de la experiencia de los “pueblos trasplantados” del Cono Sur (RIBEIRO, 1970), que habitan territorios que tenían menor densidad de población al momento de la Conquista, y donde la población indígena fue en gran parte eliminada durante la construcción de los Estados nacionales, especialmente en el caso uruguayo. En estos países, como se planteó al comienzo, se hizo posible mucho antes la ruptura con el modelo primario exportador, del que la república oligárquica posterior a las Independencias era correlato político. Esto se hizo mediante la extensión temprana de la ciudadanía en un marco de relativa continuidad republicana, como en Uruguay; o, en forma más típica con respecto a la totalidad de América Latina, a través de los nacionalismos populares que sucedieron a la crisis mundial de los años 1930, como el peronismo argentino²⁰.

La falta de un proceso robusto de industrialización anterior había

¹⁹Las resistencias que enfrentaba la inserción de la economía campesina indígena en la economía de mercado nacional, incluso muchos años después de la abolición tributaria hecha a mitad del siglo XIX, son un ejemplo ilustrativo (CONTRERAS, 2023, p. 263).

²⁰En Uruguay, el régimen político y económico que sucedió a la república oligárquica primario-exportadora tenía en su centro ya desde fines del siglo XIX a un Estado de bienestar social, y postulados que - en parte por las dimensiones de su economía, y en parte por su arraigada tradición liberal – estaban más emparentados con la socialdemocracia que con el desarrollismo industrialista que tuvo lugar en Argentina y Brasil.

impedido en Perú la formación de una clase asalariada urbana significativa y un capital industrial nacional de porte suficiente para permitir una alianza nacional-popular a la par de esas experiencias durante la primera mitad del siglo XX. Como se señaló, en Perú solamente hacia los años 1980 terminaron de eclosionar las transformaciones demográficas – explosión poblacional y migración masiva a la ciudad - que les dieron sustento en otros países. Es verdad que la emergencia de nuevos actores sociales y partidos políticos inquietó en su momento a las clases dominantes peruanas de comienzos del siglo XX, y produjo incluso un gobierno modernizador como el de Augusto Leguía en los años 1920 (un “temprano Velasco”, a decir del Dr. Carlos Contreras durante sus clases). Esta preocupación con un posible levantamiento de masas continuaba presente, de hecho, y estaría en la raíz de los esfuerzos por promover la justicia social por parte de los militares peruanos durante los años 1960 y 1970. Pero la débil respuesta a los intentos del gobierno de Velasco por activar (y cooptar) una movilización popular que brindase apoyo al proceso a través del Sinamos, parecería demostrar que, aún tan tarde como en los años 1970, la sociedad peruana se encontraba en un estadio de desarrollo anterior al que hubiese permitido una movilización de masas “populista” como las analizadas por Ianni (1975).

Una diferencia fundamental causada por este desfase histórico entre la experiencia desarrollista peruana y la de otros países de la región radica en el plano externo, que antes señalamos como el principal constreñimiento enfrentado por los actores a la hora de adoptar una determinada estrategia de desarrollo en contextos periféricos. El capitalismo internacional estaba en una fase muy distinta durante los desarrollismos iniciados en 1930-1940 si lo comparamos con los años 1970. El primer escenario permitió recoger paradójicos beneficios del quiebre de 1929 para la industrialización latinoamericana, en la forma de un proteccionismo natural que conjugaba la fuerte demanda de productos primarios con la ventaja de no tener que competir con la producción

industrial más avanzada de los países centrales, ocupados con el esfuerzo de guerra. Esto fue seguido después por la expansión mundial de la posguerra y los “treinta gloriosos”. La era de la segunda globalización, por el contrario, estuvo marcada por la recesión de los picos del petróleo en la década de 1970, un tipo de capital volátil que comenzaba a enfrentar menores barreras geográficas, el declive del fordismo como modo de producción predominante, y la tendencia general de Occidente (tanto en el centro como en la periferia) a la desindustrialización, la pérdida de centralidad del trabajo y la expansión del sector de servicios. Los “treinta gloriosos” del Perú, que Contreras (2023, p. 393) ubica, provocativamente, entre 1962 y 1990, no coinciden con la era dorada del crecimiento mundial²¹.

Al tomar en cuenta todos estos elementos, la aparición de un tipo de militares que parecerían - cuando vistos desde afuera del Perú - pertenecer más a un libro de historia que a los albores de la segunda globalización, deja a un tiempo de resultar tan insólita para el contexto peruano, y se revela irreproducible en otras latitudes. Ocurrió en un escenario en que aún había numerosas tareas históricas de construcción nacional pendientes, que no habían sido completadas ni por una burguesía nacional inexistente - al estilo de las experiencias de los países centrales - ni por el estatismo popular de las economías más desarrolladas de América Latina.

En Uruguay, un proceso de este tipo hubiera sido imposible en los años 1970. No había una oligarquía tradicional cuya dominación pudiese quebrarse a través de un liderazgo militar que representase a los sectores populares, sino un sistema político liberal consolidado, con partidos y sindicatos de larga trayectoria. Ya no existía un verdadero campesinado con peso demográfico importante desde décadas atrás, al cual entregar efectivamente la tierra mediante una reforma agraria como la realizada en Perú. Y tampoco existía un sector exportador concentrado que se pudiese

²¹A la hora de hacer un balance del desarrollismo peruano y comparar su desempeño con el modelo de desarrollo que lo precedió, Contreras (2023, p. 426) señala que esta diferencia entre un contexto mundial favorable y otro marcadamente desfavorable debe ser considerada. A modo de hipótesis, creo que esta diferencia explica en buena medida el relativo fracaso del velasquismo en el plano económico descrito antes. En el plano político – en cuanto a su corta duración con respecto a otras experiencias de la región y su abrupta caída - se explicaría por la ausencia de condiciones sociales para la movilización popular indicada recién.

nacionalizar (típicamente los hidrocarburos, como suelen hacer las experiencias nacional-populares tanto de ese entonces como de la actualidad). Entiendo que esto es muy claro desde la mirada contemporánea; que no lo fuese para numerosos observadores en aquel momento sólo habla de lo voluntarista que podía llegar a ser la izquierda de la época.

Retomando las categorías teóricas presentadas en la segunda sección, en Uruguay ya había una coalición de clases desarrollista relativamente exitosa en el poder; no estaba pendiente, como en el caso peruano, su construcción, ya sea por vía civil o militar. Las distintas fuerzas en pugna percibían los límites estructurales alcanzados por el modelo de desarrollo industrializador dirigido por el Estado (BÉRTOLA; OCAMPO, 2010) y la necesidad de trascender su énfasis en el mercado interno. Prueba de ello es la prominencia de los temas ligados a la economía y el desarrollo en los comunicados de los militares, así como la afirmación explícita de la necesidad de estimular la exportación y hacer del comercio exterior una prioridad, más allá de la ausencia señalada de propuestas concretas para su solución, y de su incongruencia con la conducción económica posterior. Lo que estaba siendo contestado con creciente virulencia era la propia hegemonía de esa coalición, tanto por la izquierda – que pretendía avanzar hacia el socialismo – como por la derecha, que pretendía (y acabó implementando) una restauración del orden liberal-dependiente concentrado en las exportaciones primarias.

6. Consideraciones finales

Se ha procurado contextualizar históricamente la experiencia del desarrollismo militar peruano, sintetizando las principales políticas implementadas por el régimen para captar su orientación socioeconómica más general. Posteriormente, analizamos el impacto de este fenómeno en

el Uruguay de los años 1970, a partir de la recepción favorable que tuvo entre algunos sectores de este país. El énfasis estuvo puesto en las importantes diferencias que separan ambos contextos históricos y el desfasaje entre las expectativas de la izquierda peruanista con respecto a la práctica real de las Fuerzas Armadas una vez en el poder.

La conclusión central de estas reflexiones es que la reproducción de fenómenos idénticos entre escenarios históricos tan distintos es imposible. Esto se aplica, como acabamos de argumentar, al caso de países con niveles de desarrollo relativo muy desigual. Pero también es relevante para las ocurrencias más contemporáneas de reivindicación de la figura de Velasco Alvarado, y de una posible vía militar para el desarrollo latinoamericano.

El velasquismo tuvo su razón de ser exclusivamente en el Perú de su época, en el marco de un proceso de construcción nacional y modernización económica y social que aún permanecía pendiente, de manera tardía respecto a otros países de América Latina. Otras experiencias similares se dieron en sociedades que tuvieron un recorrido histórico parecido, como en el caso ya mencionado de Ecuador o Panamá. No obstante, si se desea evitar en el presente equivocaciones históricas como las señaladas para una parte de la izquierda uruguaya de los años 1970, es importante tener presente el carácter peculiar de la experiencia peruana, y las grandes diferencias que alejan al capitalismo latinoamericano contemporáneo del que existía en aquellos años.

7. Referencias

AGUIRRE, Carlos; DRINOT, Paulo. **La revolución peculiar: repensando el gobierno militar de Velasco**. 1a. ed. Lima: IEP, Instituto de Estudios Peruanos, 2018. (Perú problema, v. 57).

ARANDA, Gilberto; RUIZ, María Olga. Los imaginarios “peruanistas” en la izquierda uruguaya: el debate de febrero del 73. **Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani**, v. 15, n. 2, p. 251–274, 2023. Disponible en: <https://confluenze.unibo.it/article/view/17891>. Consultado en: 11 mar. 2024.

BÉRTOLA, Luis; OCAMPO, José Antonio. **Desarrollo, vaivenes y desigualdad: una historia económica de América Latina desde la independencia.** España: Secretaría General Iberoamericana, 2010. Disponible en: <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=2161>. Consultado en: 5 dic. 2024.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; IANONI, Marcus. **Developmental class coalitions: historical experiences and prospects.** São Paulo: [s. n.], 2015. Texto para Discussão EESP/FGV n. 386. Disponible en: <https://bresserpereira.centrodeeconomiapolitica.org/index.php/discussion-papers/9657-6002>. Consultado en: 15 nov. 2024.

BULMER-THOMAS, Victor. **La historia económica de América Latina desde la Independencia.** México: FCE, 1998.

CAVIASCA, Guillermo Martín. **Fuerzas armadas y guerrilla en el año 1973.** Debate de prensas partidarias. Question/Cuestión, v. 2, n. 66, p. e506, 2020. Disponible en: <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/6058>. Consultado en: 11 mar. 2024.

CONTRERAS, Carlos. **Historia económica del Perú: desde la conquista española hasta el presente.** 1a ed. Lima: IEP, Instituto de Estudios Peruanos, 2023. (Serie Estudios históricos, v. 88 [i.e. 89]).

IANNI, Octavio. **La formación del Estado populista en América Latina.** México: Ediciones ERA, Serie Popular, n. 30, 1975.

LEANIZ, Juan. **Los comunicados 4 y 7, las peripecias de febrero de 1973.** Espacio de Formación Integral «Historia pública, historia en discusión».

Montevideo: FHCE, Universidad de la República, 2023. Disponible en: <https://fhce.edu.uy/efi-historia-publica-historia-en-discusion-2>. Consultado en: 18 mar. 2024.

MARSHALL, Thomas Humphrey; BOTTOMORE, Tom. **Citizenship and social class**. London: Pluto Press, 1996. (Pluto perspectives).

O'DONNELL, Guillermo. **El Estado Burocrático-Autoritario**. Belgrano, 1996.

PADRÓS, Enrique Serra. **Como el Uruguay no hay...: terror de Estado e segurança nacional Uruguai (1968-1985)**: do pachecato à ditadura civil-militar. Orientador: César Augusto Barcellos Guazzelli. 2005. 434f. (Tesis de Doctorado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, 2005. Disponible en: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/6149>. Consultado en: 13 nov. 2024.

PALAZUELOS, Antonio. Introducción a la realidad económica latinoamericana. In: HARTO DE VERA, F (org.). **América Latina: Comunicación y globalización**. Madrid: La Catarata, 2000.

PINTO, Aníbal. Notas sobre la naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de la América Latina. In: **Dos Polémicas sobre el Desarrollo de América Latina**. Santiago: ILPES, 1970.

RAMÍREZ, Gonzalo. Entrevista a Hugo Chávez. **El Viejo Topo** [online]. 21 jul. 2024. Disponible en: <https://www.elviejotopo.com/topoexpress/entrevista-a-hugo-chavez/>. Consultado en: 26 nov. 2024.

RIBEIRO, Darcy. **As Américas e a civilização: processo de formação e causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos**. Civilização Brasileira, 1970.

ROJAS ROJAS, Rolando. **Los años de Velasco (1968-1975)**. 1a ed. Lima: IEP

Instituto de estudios peruanos, 2021. (Serie Estudios históricos, v. 88).

TALAVERA, Pedro. Tipología de las formaciones sociales capitalistas periféricas (I) y (II). In: PALAZUELOS, Enrique. **Las economías capitalistas durante el período de expansión: 1945-1970**. Madrid: Akal, 1989.

TRICÁNICO, Santiago. **Comunicados 4 y 7: treinta y tres años después**. Montevideo: Rumbo, 2005.

UY PRESS. **Documentos sobre el 9 de febrero de 1973**. Montevideo: Agencia Uruguaya de Noticias. 2017. Disponible en: <https://www.uypress.net/auc.aspx?74973%>. Consultado en: 13 nov. 2024.

ZAVAleta MERCADO, René. **Lo nacional-popular en Bolivia**. 1a ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 1986. (Sociología y política).